



DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL CIES

ISSN 2362-2598

N° 03

DICIEMBRE - 2014

Estrategias y acciones colectivas “para parar la olla”

Una retrospectiva sobre los saqueos de 1989 y 2001-2002

Ana Lucía Cervio – Martín Eynard

Conflicto y Estructura social

Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos

**ESI ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS
EDITORA**

Documentos de Trabajo del CIES

ISSN 2362-2598

N° 03

DICIEMBRE - 2014

Publicación electrónica Trimestral

Director del CIES:

Adrián Scribano

Edición y coordinación general:

Claudia Gandía

Editor responsable:

Estudios Sociológicos Editora
Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos
editorial@estudiosociologicos.org – www.estudiosociologicos.org

Comité Editorial

Adrián Scribano

Gabriela Vergara

Ana Cervio

Horacio Machado Aráoz

Claudia Gandía

Pedro Lisdero

Los textos publicados en Documentos de Trabajo del CIES son sometidos al referato de evaluadores internos y externos, a quienes agradecemos su participación.

Diseño de tapa: Romina Baldo

Documentos de Trabajo del CIES

Documentos de Trabajo del CIES es una publicación electrónica del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos, donde las y los investigadores del ámbito de las Ciencias Sociales tienen la oportunidad de socializar los avances relativos a sus investigaciones como así también las actividades académicas y científicas en las que participan difundiendo su labor.

Es la intención al generar este espacio que, quienes estamos abocados a la tarea de construir conocimiento científico desde el Sur, nos encontremos en él para escribir acerca de las indagaciones realizadas en el marco de las indagaciones individuales y colectivas vinculados a los campos temáticos propios de las áreas que convocan:

Ambiente y Sociedad, Vida Cotidiana, Espacio-temporalidad y Sensibilidades Sociales, Conflicto y Estructura Social e Innovaciones Metodológicas.

Constituye esta otra oportunidad para dejar constancia del interés -compartido por muchas y muchos-, y del convencimiento que una de nuestras tareas es la de difundir las voces de quienes tienen mucho que decir sobre las realidades sociales, ambientales, cotidianas y sobre los modos de abordarlas científicamente.

En este sentido los objetivos de esta publicación recuperan las intenciones del CIES de dialogar e indagar sobre la sociedad desde caminos interdisciplinarios vinculados a la Teoría Social y a formas de indagación concretas.

Particularmente la creación de este espacio se realiza con el propósito de dar a conocer los proyectos y líneas de trabajo a la comunidad científica, académica e interesados en las temáticas en estudio que se desarrollan en dicho Centro.

Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos

Las múltiples y complejas transformaciones que se están evidenciando en el inicio de la segunda década del siglo XXI en Latinoamérica, el Sur global y el mundo se presentan a todos los científicos sociales como una fuente de desafíos y preguntas. Por ello, el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (Asociación Civil – Leg. 1842624) es un espacio que se propone compartir, dialogar e indagar la sociedad -más allá de la adjetivación desde la sociología- desde caminos interdisciplinarios que giran alrededor de la Teoría Social y las prácticas de indagación concretas.

Presentación

Las prácticas conflictuales constituyen un instrumento hermenéutico privilegiado desde donde analizar el estado de las relaciones en las sociedades capitalistas. Las acciones colectivas, los movimientos y las protestas sociales que conllevan estos haceres posibilitan realizar una topografía de lo social que hace visible el quantum energético de rebelión que toda demanda contiene (Scribano, 2008). Los conflictos aparecen, por lo tanto, como un lugar donde se conjugan múltiples dimensiones y disputas afectivas, materiales y simbólicas. En este sentido el análisis de conflicto social puede constituirse en una forma de estudio que concede la posibilidad de captar simultáneamente la dinámica del todo del régimen capitalista y de cada una de las dimensiones que lo constituyen, lo que permite explorar la lógica que subyace a la organización precaria y violenta que se impone en cada momento histórico.

Los conflictos y las protestas sociales son una referencia constante de la vida política argentina. Al menos en los últimos cuarenta años se puede señalar un estado de conflictividad perpetuo a lo largo de todo el período democrático que se inicia en 1983 y se profundiza de modo creciente en los años '90, llegando a manifestarse en una convulsión social a comienzos del milenio. La crisis social se fue exteriorizando a través de sus diversos indicadores de vulnerabilidad: desempleo, pobreza, desnutrición, entre otros; evidenciado la escasa capacidad institucional para controlar la desafiliación estructural generada por los procesos de acumulación. Sin embargo, en correspondencia a las transformaciones que tuvieron lugar en las condiciones de estructuración de las clases subalternas se produjo como contrapartida cambios importantes en las formas que asume la protesta social en el país.

En este contexto, Ana Lucía Cervio y Martín Eynard, los autores encargados del presente Documento de Trabajo, proponen una producción teórica y empírica de las consecuencias de los conflictos acontecidos a partir de las dos principales crisis sociales y económicas generadas en nuestro territorio: el estallido hiperinflacionario de 1989 y la llamada “crisis del 2001-2002”. Más específicamente su propuesta analítica explora las particularidades de la acción conflictual de los saqueos que se produjeron frente a ambos sucesos en la provincia de Córdoba, buscando conectar líneas de continuidad estructurales –como la desocupación, precarización y la concentración de la riqueza-; que por un lado, operaron como condiciones para la confluencia de acciones disruptivas en ambos períodos; y por el otro, derivaron en una serie de estrategias comunitarias configuradas en torno a solidaridades de clases que dejaron “huellas” en las prácticas de los sectores populares.

Se parte de la perspectiva que toda acción colectiva es precedida por un cúmulo de conflictos conectados entre sí que dan sentido a la producción y reproducción de las luchas cotidianas. En este sentido la investigación coloca en el tapete las consecuencias de un régimen regulatorio instituido sobre

los cuerpos, mantenido por vía del ejercicio del poder que detenta lisa y llanamente la economía (como fue la violencia de la moneda durante los años 80) y por el continuo disciplinamiento social que supone la configuración creciente de un “ejército de reserva” en disponibilidad para los procesos de precarización laboral. En este escenario las acciones conflictuales permiten marcar los límites de compatibilidad sistémica mostrando la insolvencia de los mecanismos de resolución de conflictos, dejando paso a la posibilidad de mayor violencia y represión social; a las modificaciones en las reglas de inclusión social -que generan nuevas identidades sociales-; y a la constitución de espacios públicos de encuentro que involucran cambios en la consideración social de la definición de la política (Schuster y Scribano, 2001)

En esta línea argumentativa, la apuesta teórica fuerte del escrito es considerar la asociación entre el conflicto social y su repercusión en el uso y la disposición de las energías corporales y sociales de los sectores empobrecidos. El cuerpo concentra el centro de gravedad de dichas energías y alimenta todo un camino de autonomía e intersubjetividad. En este sentido, quizás uno de los aciertos principales del trabajo es evidenciar el carácter social, de clase y biológico de los cuerpos en estado de hambre. Así aquellos que ocasionan saqueos, lejos de ser leídos y tratados como sujetos que producen simples manifestaciones espontáneas de “desesperación colectiva” provocadas por la penuria de la desalimentación; son interpretados como individuos que re-accionan atravesados por una materialidad específica y de acuerdo a su posición en el campo social. Igualmente por su corporalidad residual en el contexto estudiado, estos agentes son considerados por los investigadores, tanto como objeto de una política de los cuerpos que los recluye en límites físicos y simbólicos definidos por la “cartografía urbana neo-colonial”; como por sujetos de la periferia que impulsan acciones de activación de solidaridades en el ámbito territorial operando de acuerdo a un régimen de sensibilidad en constante re-definición.

De esta manera los autores nos invitan a pensar en las posibles tramas colectivas que se tejen de manera permanente en el marco de la metamorfosis de las relaciones capitalistas de dominación durante las últimas décadas. Así la conflictividad social oscila entre la coagulación de la acción lograda gracias a los procesos de expropiación y la activación de prácticas esperanzadoras de la recuperación de la capacidad “del hacer con otros y para otros” en espacios de proximidad. Quizás estas últimas pueden derivar en instancias disruptivas, contra-expropiatorias o al menos intersticiales.

Diego Quattrini

Bibliografía citada

SCHUSTER Federico y SCRIBANO Adrián (2001). Protesta Social en la Argentina de 2001: entre la Normalidad y la Ruptura. En OSAL N° 5. CLACSO. Buenos Aires. Septiembre 2001.

SCRIBANO, Adrian (2008). “Sensaciones, conflicto y cuerpo en la Argentina después del 2001”.
Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología. Vol. 17 No. 2 (abril – junio, 2008): 205 – 230.
Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12217201> Fecha de consulta, 01/08/2014.

Estrategias y acciones colectivas “para parar la olla”.

Una retrospectiva sobre los saqueos de 1989 y 2001-2002 en la ciudad de Córdoba

Ana Lucía Cervio y Martín Eynard

Ana Lucía Cervio:

CONICET-CICLOP/CIES

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigadora Asistente del CONICET, con lugar de trabajo en el CICLOP (FCE-UBA). Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES). Integrante del Grupo de Estudios sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

anacervio@hotmail.com

Martín Eynard:

CIECS-UNC-CONICET

Doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Integrante del Programa de Estudios sobre Sociedad, Salud, Enfermedad y Prácticas de Curar, y del Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social, del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, Unidad Ejecutora de CONICET, Universidad Nacional de Córdoba (CIECS, CONICET – UNC).

eynardmartin@yahoo.com.ar

Resumen: En las últimas décadas, los saqueos a comercios y supermercados han sido parte de la historia argentina. Equiparados con figuras que van desde el “robo” a los “disturbios”, pasando por la alusión al “caos”, la “crisis” y al “flagelo del hambre y la pobreza”, estas prácticas, vueltas instancias críticas, desde hace tiempo tienen un sitio reservado en la historia social del país.

Muchas publicaciones académicas han analizado el escenario social, político y económico que (se) configuró (en torno a) los saqueos que se produjeron frente al estallido hiperinflacionario de 1989 y los que acompañaron la llamada “crisis del 2001-2002”, sin embargo la producción teórico-empírica referida a sus dinámicas y consecuencias en el marco de los interiores provinciales es relativamente escasa. El

presente Documento de Trabajo explora las particularidades de ambos sucesos en el marco de la ciudad de Córdoba, buscando poner en evidencia algunas líneas de continuidad estructurales que operaron como condiciones para la “irrupción” de los saqueos en ambos períodos, por un lado, y una serie de estrategias comunitarias configuradas en torno a solidaridades intra-clases que tuvieron lugar entre los sectores populares de la ciudad, por el otro.

Palabras clave: Saqueos - Crisis hiperinflacionaria de 1989 - Crisis 2001-2002 - Acciones colectivas alimentarias- Solidaridades intra-clases.

1. Presentación

En las últimas décadas, los saqueos a comercios han sido parte de la historia argentina. Equiparados con figuras que van desde el “robo” a los “disturbios” (pasando por la alusión al “caos”, la “crisis” y al “flagelo del hambre y la pobreza”) estas prácticas, vueltas instancias críticas, desde hace tiempo tienen un sitio reservado en la historia social del país.

Tan fuertes son las marcas sociales, políticas e institucionales que los saqueos han plasmado en el imaginario colectivo, que éstos suelen regresar (una y otra vez) como imagen fantasmagórica frente a algún destello de crisis institucional o ante la menor caída de indicadores económicos clave, fogoneada, claro está, por intereses de variado cuño. Un dato no menor es que parecen ser *fantasmas estacionales*, pues en los últimos tiempos “retornan” como potencialidad –vehiculizada por el discurso político y mediático– cuando se acercan las fiestas de fin de año. En este sentido, los saqueos producidos como reacción a la crisis económica e institucional que tuvo lugar en diciembre de 2001 han dejado huellas, estructurando incluso una especie de “futurológica” que obliga a las autoridades de turno a emitir mensajes destinados a derrumbar rumores, e incluso solicitar la intervención de la Justicia para sancionar a los grupos o individuos que, con “voluntad de sembrar el caos”, difundan acciones programadas de esta naturaleza¹.

Etimológicamente, el verbo “saquear” proviene del orden militar, particularmente, del *saccommanno*, en Italia (1438), y en el siglo XIV de la voz alemana *sackmann*, “*mozo de bagajes de un ejército*” (formado con *man*, “hombre” y *sack* “saco”, por el que llevaban), “*encargado de las requisas*”, según el Diccionario Etimológico Corominas (1987). El mismo sentido castrense se observa en la primera acepción que aporta el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2014), donde el término “saquear” es definido como: “*Dicho de los soldados: apoderarse violentamente de lo que hallan en un lugar*”. Esta definición de la RAE es seguida por dos significaciones complementarias, a saber: “*Entrar en una plaza o lugar robando cuanto se halla*” y “*Apoderarse de todo o la mayor parte de aquello que hay o se guarda en algún sitio*”.

Siguiendo las pistas que marcan los antecedentes reseñados, “saquear” expresa la acción de despojar/robar/desvalijar/depredar, “poniendo en el saco” el botín arrebatado y dejando prácticamente devastado el lugar que es objeto y escenario de esta acción. Dada su naturaleza, se trata de un hecho colectivo que se manifiesta fugaz y repentinamente. Sin embargo, más allá del carácter perecedero de su

¹ En este sentido, son elocuentes los recientes dichos públicos del Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, desmintiendo la posibilidad de que se produzcan saqueos a fines de 2014, como consecuencia de la crisis económica e inflacionaria que atraviesa Argentina. Véase: <http://www.lanacion.com.ar/1738533-capitanich-nego-un-escenario-de-saqueos>; http://www.clarin.com/politica/Jorge_Capitanich-fin_de_ano-saqueos-Casa_Rosada-Justicia_0_1238276323.html; <http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-258278-2014-10-24.html>

manifestación, los saqueos siempre tienen algún grado de organización, es decir, no son espontáneos sino obra de grupos que se los proponen como un objetivo.

Originariamente concebido como un derecho de los “vencedores”, que tuvo como antecedentes “el gran saqueo” de la Conquista y, luego, los que se sucedieron durante las guerras civiles, internacionales y de frontera del siglo XIX, sólo por citar algunos, la historia argentina de las últimas tres décadas de democracia muestra un giro: ya no son los “vencedores” sino los “vencidos” quienes protagonizan saqueos masivos a comercios y supermercados como respuesta a las consecuencias sociales del modelo de acumulación que se instala en los años ’70 para seguir profundizándose de manera sistemática hasta la actualidad.

Así, frente al despojo y la expulsión social que suponen las políticas de ajuste de los años ‘80, en 1989 se producen saqueos en distintas ciudades del país que irrumpen como re-acciones a la crisis hiperinflacionaria, poniendo en “jaque” la estabilidad institucional, e incluso provocando la entrega anticipada del poder del entonces presidente Raúl Alfonsín. Algo similar se produce doce años más tarde, cuando los impactos sociales de las políticas neoliberales (aumento del desempleo, congelamiento de los salarios e inflación, entre otros) se traducen en más de la mitad de los argentinos viviendo por debajo de la línea de la pobreza, suscitándose olas de saqueos en múltiples puntos del país durante el verano 2001-2002².

Diversas publicaciones académicas se han dedicado a analizar el escenario social, político y económico que (se) configuró (en torno a) los saqueos de 1989 y los que acompañaron la llamada “crisis del 2001-2002”, sin embargo la producción teórico-empírica referida a sus dinámicas y consecuencias en el marco de los interiores provinciales es relativamente escasa. En esta línea, el presente Documento de Trabajo explora las particularidades de ambos sucesos en el marco de la ciudad de Córdoba, buscando poner en evidencia algunas líneas de continuidad estructurales que operaron como condiciones para la “irrupción” de los saqueos en ambos períodos, por un lado, y una serie de estrategias comunitarias configuradas en torno a solidaridades intra-clases que tuvieron lugar entre los sectores populares de la ciudad, por el otro.

² 12 años más tarde, diciembre volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la cronología de saqueos recientes. En efecto, aunque con un origen diferencial a los episodios de 1989 y 2001-2002, no puede dejar de mencionarse el acuartelamiento de policías que tuvo lugar en diciembre de 2013, en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales, que involucró a 21 provincias argentinas. Como consecuencia de estos actos de protesta, se produjeron disturbios y saqueos a comercios en ciudades como Córdoba, San Miguel de Tucumán, Santa Fe, Mar del Plata (Buenos Aires), Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), Concordia (Entre Ríos), San Pedro y Perico (Jujuy), entre las más afectadas, dejando como saldo 14 muertos (cifra no oficial) y cientos de heridos (PIMSA, 2013).

2. Córdoba: hiperinflación y saqueos en la década del '80

En diciembre de 1983, el *debut* del gobernador Eduardo Angeloz³ se produce en un contexto general de recesión económica y productiva. La caída de la producción industrial, la desocupación y la concentración del ingreso aparecen en escena como rasgos de la transición que comenzarán a ser evidenciados por la naciente “ciudad democrática”, descartándose de plano –con la contundencia de las estadísticas– la metáfora insular que el radicalismo utilizará para sintetizar el desempeño de la provincia a lo largo de toda la gestión⁴. Así, la ciudad capital (aunque también pueden citarse localidades del interior provincial, en especial del norte cordobés, cuyos indicadores socioeconómicos a lo largo de la década del '80 devuelven “con creces” la imagen del estancamiento y de la expulsión de miles) reivindica para sí la postal de una época en la que el deterioro de las principales variables económicas, junto a la precarización laboral y habitacional de amplios sectores, se despliegan de manera inversamente proporcional a la expansión concentracionaria del gran capital que se sucede, al menos, desde el golpe de Estado de 1976⁵. Algunos indicadores socio-económicos señalan en la dirección apuntada.

Durante la década del '80, la reconversión económica operada desde 1976 impacta directamente en la evolución de la tasa de desocupación en el Gran Córdoba, alcanzado incluso, tanto en el inicio de la transición (5.1%, en octubre de 1984) como después del estallido hiperinflacionario (7.3%, en octubre de 1989), valores que se ubican por encima del total registrado para todos los aglomerados urbanos del país en su conjunto (4.4% y 7.1%, respectivamente) (EPH-INDEC, 1983-1989). Asimismo, la tasa de subocupación durante el período bajo análisis muestra oscilaciones que, al menos durante los primeros años de la transición y al término de la gestión de Raúl Alfonsín, colocan a los ocupados cordobeses en una situación de precarización laboral que supera al resto de los aglomerados del país en su conjunto⁶.

³ En el orden provincial, la restauración democrática se inicia formalmente el 12 de diciembre de 1983 con la asunción de las nuevas autoridades constitucionales. El 30 de octubre, el binomio de la UCR, Angeloz-Grosso, se impone en la provincia con el 55.84% de los votos, superando con ventaja al 39.22% obtenido por la fórmula del PJ Bercovich Rodríguez-Simó. Por su parte, Ramón Mestre gana la intendencia de la ciudad con el 55% del apoyo electoral (*La Voz del Interior*, 16/11/1983).

⁴ Desde la recuperación de la democracia iniciada en 1983, la versión de una provincia “distinta” y “distintiva” en sus más diversos desempeños (económico, político, intelectual y cultural) fue alimentada metafóricamente por la gestión de la UCR a través de la construcción y difusión pública de la imagen de Córdoba como una “isla” en el país.

⁵ Para un análisis del proceso de concentración y centralización del capital en manos de una poderosa cúpula empresaria fortalecida bajo el cobijo del modelo “liberal represivo” de la dictadura que tiene lugar durante los '80, véase: Azpiazu, Basualdo, Khavisse, 1989; Ortiz y Schorr, 2007a, 2007b, Castellani, 2007).

⁶ De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en 1984, el subempleo en el Gran Córdoba afecta al 9% de la PEA, en contra del 5.9% registrado en el mismo período para el total de aglomerados del país. En octubre de 1989, en un contexto marcado por una

De esta forma, la desocupación del 5.1%, el 8.6% de subocupados, junto a un 36.2% de la población con menores ingresos (el 40% más pobre) dedicado a tareas “por cuenta propia” sintetizan, *grosso modo*, la estructura ocupacional cordobesa que la gestión de Eduardo Angeloz recibe como legado de la dictadura. Este proceso irá acentuándose a lo largo de la década al ritmo de los impactos de las políticas económicas puestas en práctica por el gobierno nacional y provincial, resultando que a mediados de 1989, tras la estampida hiperinflacionaria que marcará el fin de la administración central, la “fotografía” ocupacional cordobesa exhiba para estos mismos indicadores valores todavía más críticos (7.3%, 9.2% y 34%, respectivamente).

Si bien el deterioro del mercado de trabajo registrado en Córdoba durante el período señalado obedece a la articulación de múltiples variables económicas, sociales y políticas que se despliegan a nivel nacional, su manifestación y persistencia en el orden local remite, al menos en una primera instancia, a dos fenómenos concurrentes. En primer lugar, al proceso de des-industrialización: el cierre de pequeños y medianos establecimientos asediados por el incremento de los costos fijos y sin subsidio estatal, sumado al traslado de grandes plantas hacia zonas favorecidas por los regímenes de promoción, la creciente terciarización de la economía y la retracción de los volúmenes de producción registrados en la industria cordobesa durante los ‘80 configuran un abultado y creciente “*ejército de reserva*” en disponibilidad para (y a *disposición* de) los procesos de precarización e informalidad laboral, o bien la expulsión directa. En conexión con lo anterior, una segunda arista de la reconversión ocupacional aludida lo constituye el régimen de alta inflación que impera durante toda la “*década perdida*”, provocando un profundo deterioro en el poder adquisitivo de los salarios y, a partir de allí, una redistribución regresiva de los ingresos que irá profundizándose con el correr de los años.

Reivindicando la tendencia nacional registrada durante casi toda la gestión de Alfonsín, en Córdoba los salarios fluctúan por detrás de la inflación. Considerando la distribución del salario medio en Argentina, se observa que luego de una moderada recomposición producida durante el primer año, éste comienza a declinar en términos reales en forma pronunciada, registrándose una caída cercana al 30% entre 1984 y 1989. Al finalizar la gestión alfonsinista, el salario medio en el país es casi un 50% más bajo que en los años anteriores al golpe de Estado de 1976 (Azpiazu, 1991; Ortiz y Schorr, 2007a). Asimismo, y como consecuencia de este deterioro salarial, en 1989 la participación de los asalariados argentinos en el PBI global es del 24%, es decir, un 17% menor que la registrada en 1983, y un 44% más baja que la de 1975. Como consecuencia, las características regresivas que asume la redistribución de los ingresos durante la década patentizan el contexto imperante, marcado por una fuerte traslación de

relativa estabilización de la hiperinflación desatada meses atrás, la tasa de subocupación en el Gran Córdoba (9.2%) vuelve a situarse por encima de la media nacional (8.8%).

recursos públicos hacia el capital concentrado interno merced a un profundo deterioro de la situación ocupacional y salarial de los trabajadores. En esta línea, no sorprende que a pocos meses de desatarse el estallido hiperinflacionario de 1989, el 20% de los hogares más ricos del Gran Córdoba se apropiara de casi el 50% de los ingresos totales, mientras que el 20% más pobre se quedara con apenas el 4.6%⁷.

A lo largo de la década del '80 los asalariados ven profundizar el deterioro del poder adquisitivo de sus salarios, pues las remuneraciones medias no sólo se contraen sino que rinden menos a causa de la inflación imperante. En efecto, considerando la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a lo largo de la gestión radical se observa la persistencia del régimen de alta inflación instaurado en 1975. De acuerdo al INDEC, desde la asunción de Alfonsín y hasta la implementación del Plan Austral (junio de 1985), la inflación muestra un incremento del 21% mensual, con meses de 27.5% (septiembre/84), 29.4% (abril/85) y 30.5% (junio/85). Esta tendencia irá fluctuando durante el bienio 86-87 (alcanzando en la ciudad de Córdoba acumulados anuales del 80.8% y 168.5%, respectivamente) para comenzar a acelerarse luego de la puesta en vigencia del Plan Primavera, en 1988 (Canitrot, 1992; Azpiazu, 1991). El punto más dramático de la evolución de este indicador se produce en mayo de 1989, cuando el descontrol de la suba de precios provoca un conflictivo estallido hiperinflacionario⁸, seguido por una ola de saqueos a supermercados y comercios en los principales centros urbanos del país que obligan al presidente a entregar anticipadamente el poder al candidato justicialista electo.

Entre el 23 y el 31 de mayo de 1989 se producen 329 saqueos en todo el país (115 en Rosario, 110 en el Gran Buenos Aires, 91 en Córdoba, 8 en Mendoza y 5 en Tucumán), iniciándose una represión policial y parapolicial cuyo saldo serán 19 muertos, 174 heridos y 1852 detenidos (Martínez, 1991; Iñigo Carrera, Cotarelo, Gómez, y Kindgard, 1993; Neufeld y Cravino, 2001; *La Voz del Interior*, 06/06/1989). Tanto el gobierno nacional como el provincial atribuyen los saqueos a “grupos organizados” o “activistas de izquierda” que apuestan a la desestabilización institucional; sentencia que acelera el establecimiento del estado de sitio el día 29 y la intensificación de la presencia militar y policial tanto en edificios públicos como en la periferia de la ciudad de Córdoba.

⁷ Reparando en la evolución del ingreso total familiar en el Gran Córdoba se observa que en 1983 el 10% de los hogares más ricos ganan 12.7 veces más que el 10% de los más pobres. Esta brecha irá profundizándose durante el período, alcanzando los siguientes valores: 12.7 (1984); 14.8 (1985); 12.9 (1986); 15.3 (1987); 16.9 (1988) y 17 (1989). (EPH-INDEC 1983-1989- onda octubre).

⁸ En la ciudad de Córdoba, la estampida inflacionaria registrada en marzo de 1989 (16.4%) sostendrá un drástico aceleramiento durante los meses siguientes (abril: 32.1%; mayo: 78.0%) llegando a alcanzar récords históricos en junio y julio con el 116.6% y el 195.4%, respectivamente. Durante 1989, el IPC acumula un crecimiento total de 5072.9% en contra del 365.8% registrado en 1988.

Los saqueos fueron perfectamente organizados por *activistas y agitadores* que no se resignan a vivir en el orden y el respeto que impone la libertad que tan costosamente hemos recuperado y defendido en estos últimos seis años (...) Esta deleznable acción de *sujetos y grupos que en el caos y en la anarquía, en la violencia y la agitación, encuentran la presencia política que son incapaces de lograr en el respeto de las instituciones*, no puede hacernos desconocer la grave situación de crisis y penuria por la que están pasando vastos sectores de nuestra comunidad (...) Hoy más que nunca estoy convencido que sólo con *grandes reformas estructurales*, justas y prudentes en sus costos y consecuencias sociales, podremos asegurar y consolidar definitivamente la democracia⁹.

De acuerdo a información periodística, los primeros saqueos se producen el día 23 de mayo de 1989 en Córdoba, Rosario y Mendoza. La jornada se desarrolla en el marco de un feriado bancario y cambiario dispuesto por el Banco Central ante la falta de definiciones sobre el nuevo paquete de medidas económicas, cuya elaboración queda “trabada” luego del rechazo del presidente electo. Ese mismo día se paralizan las negociaciones para el traspaso del poder entre el gobierno y el PJ, al tiempo que el gabinete nacional presenta su renuncia al jefe de Estado. Por la tarde, Alfonsín emite un mensaje por cadena de radio y televisión en el que ratifica que permanecerá en su cargo hasta el 10 de diciembre, afirmando: “vamos a ser no sólo una economía de guerra sino también un gobierno de crisis” (*La Voz del Interior*, 24/05/1989).

Esta primera ola de saqueos se sucederá hasta el 31 de mayo, registrándose más de 200 detenciones en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. Cabe destacar que entre diciembre de 1989 y marzo de 1990 se producirá un nuevo período hiperinflacionario (más breve y menos intenso que el anterior) en el que se registrarán nuevos saqueos a comercios en Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y el Gran Buenos Aires.

En este contexto, e inventariando las expresiones de conflictividad que se multiplican en otros centros urbanos del país, la prensa cordobesa “descubre” el hambre y la pobreza en la ciudad; el gobierno provincial asume tareas de asistencia alimentaria con un fuerte cariz “desactivante” de la conflictividad social, inéditas hasta el momento; grupos empresarios y organizaciones sociales impulsan colectas, donaciones y cruzadas “solidarias”; concejales de la oposición proponen modificaciones presupuestarias con la finalidad de atender “las necesidades básicas de la población”; efectivos policiales

⁹ Palabras del gobernador Eduardo Angeloz en un mensaje transmitido por cadena de radio y televisión durante las jornadas de saqueos (*La Voz del Interior*, 28/05/1989) (Las cursivas son nuestras).

y de Gendarmería Nacional reprimen “los actos de vandalismo” en la periferia, siguiendo estrictas órdenes del Ejecutivo provincial; amas de casa protagonizan “cacerolazos” en algunos barrios en rechazo a los “tarifazos” y al voraz incremento de los precios de la canasta básica¹⁰; ONGs de hábitat y promoción social de la ciudad articulan esfuerzos y recursos para concretar proyectos comunitarios; el Estado municipal instrumenta programas productivos en medio de la crisis; el arzobispo de Córdoba efectúa un llamado a la calma; las empresas provinciales de energía (EPEC) y obras sanitarias (EPOS) expresan su “solidaridad” ampliando el régimen de tarifas sociales adoptado en 1988; en sesiones “maratónicas”, las cámaras legislativas aprueban leyes de emergencia social; cientos de desocupados cordobeses solicitan diariamente su inclusión en el seguro nacional de desempleo sancionado por el gobierno nacional, etc.

Éstas y otras escenas se repiten en el escenario cordobés de la hiperinflación otorgando –con la premura que “imponen” los sucesos que se registran a nivel país– visibilidad pública a una *ciudad-otra* que parece irrumpir “súbita” y “mágicamente” de la situación de emergencia (alimentaria, social, sanitaria, institucional). “De repente”, las miradas se posan en los resquicios urbanos, propagándose narraciones sobre la ciudad de aquellos días que conectan la carencia con la amenaza, la pobreza con el peligro y el hambre con la violencia. En este sentido, vale una digresión. La prensa local describe “al detalle” los sucesos que se registran en la periferia desde la lógica del desborde, la violencia y la amenaza que “la masa ingente de saqueadores representa para la supervivencia del sistema democrático”. A fines de mayo, estas noticias aparecerán en la primera plana o bien en la sección “información general”, llegando a ocupar un lugar en “policiales” durante los primeros días del mes de junio de 1989. Asimismo, no es casual que a partir de entonces la retórica de la inseguridad urbana comience a adquirir mayor preponderancia en las narraciones mediáticas sobre la “ciudad democrática”, no sólo en base a los “disturbios del hambre” y al “incremento de la ola delictiva”, sino también por la escalada de protestas que acompañan a los programas de ajuste y racionalización estatal que comienzan aplicarse a principios de 1990 (Cervio, 2012). De este modo, a partir de las estampidas hiperinflacionarias de 1989 y 1990, en el periódico local *La Voz del Interior* se multiplican las notas referidas al incremento de la violencia en la ciudad, información sobre simposios oficiales y/o privados sobre seguridad urbana, sondeos de opinión sobre la “sensación de inseguridad” de los cordobeses, entrevistas a autoridades policiales y al ministro de Gobierno de la provincia para difundir los programas de prevención y control del delito

¹⁰ Un día antes de que se produzcan los primeros saqueos en la ciudad, más de un centenar de amas de casa de Alto Alberdi y Villa Páez se manifiestan por las calles exigiendo el inmediato congelamiento de precios y tarifas, así como aumentos salariales “que cubran, aunque más no sea, la mitad de la canasta familiar que oscila en los veinte mil australes”. Una de las manifestantes declara: “Así no se puede vivir más. Al precio que está la leche no me queda más remedio que echarle un poco de agua, pero ninguno de los chicos quiere tomar leche con gusto a cloro” (*La Voz del Interior*, 23/05/1989).

instrumentados, así como la difusión de estrategias privadas de autoprotección (alarmas comunitarias, electrificación de cercas, adquisición de armas, etc.).

En medio de rumores y de argucias desestabilizadoras que vinculan el caos (“la periferia de la ciudad es zona liberada”) con el accionar premeditado (“de ideólogos extremistas contra la supervivencia del régimen democrático”) tanto el gobierno como los medios de comunicación describen los saqueos con la metáfora de la *explosión* o del *estallido*. Subsumidas en una suerte de modelo mecánico de fuerzas físicas que hacen detonar la acción ante la crisis económica e institucional, dichas argumentaciones obturan el carácter estructural del haz de privaciones materiales que soportan quienes ocupan las posiciones subordinadas de la estructura social y espacial de la ciudad cancelando, bajo la lógica de la amenaza y del peligro, la manifestación de ese instante expresivo de la necesidad de cuerpos con hambre, cansados de no ser vistos ni escuchados.

En este contexto, se recuerda la crítica efectuada por E.P. Thompson (1979) al reduccionismo económico y mecanicista que prevalece tanto en las construcciones del sentido común como en la *doxa* académica que interpretan los levantamientos populares por el aumento del precio del pan en Inglaterra del siglo XVIII como “rebeliones del estómago”. Según este autor británico, las formas de protesta y acción directa que se suceden en tiempos de escasez (motines por el precio del pan, quema de graneros, cartas anónimas de amenaza, agravio o demanda, etc.), explicadas a partir de la lectura lineal *aumento de precios-prácticas incorrectas de los comerciantes-hambre-disturbios sociales*, son construcciones ideológicas que ocultan el sustrato cultural de clase en el que éstas se inscriben y desde el cual operan. En todo caso, los llamados “motines de subsistencia” se entran dentro de un consenso popular en cuanto a las funciones económicas legítimas de los distintos sectores de la comunidad que, tomadas en su conjunto, configuran la *economía moral de los pobres*.

Aunque esta “economía moral” no puede ser descrita como “política” en ningún sentido progresista, tampoco puede, no obstante, definirse como a-política, puesto que supone nociones del bien público categóricas y apasionadamente sostenidas que, ciertamente, encontraban algún apoyo en la tradición paternalista de las autoridades; nociones de las que el pueblo, a su vez, se hacía eco tan estrepitosamente que las autoridades eran, en cierta medida, sus prisioneros. De aquí que esta economía moral tiñese con carácter muy general el gobierno y el pensamiento del siglo XVIII, en vez de interferir únicamente en momentos de disturbios. La palabra “motín” es muy corta para abarcar todo esto (Thompson, 1979: 66).

Un atropello a dichos supuestos, junto a la vivencia de privación en sí, constituye una ocasión para la acción directa, es decir, para la puesta en acto de tácticas de resistencia y protestas cuya dimensión política puede rastrearse en la *experiencia cultural de clase* en las que se inscriben. Por el contrario, asociar de manera directa hambre y motín, sin considerar el carácter cultural y de clase, fagocita la potencialidad conflictual de los antagonismos que estas prácticas portan, volviéndolas mera explosión o estallido de “estómagos furiosos”.

En esta línea, los saqueos que se suceden a mediados de 1989 y principios de 1990 manifiestan el cansancio con-tenido, entrelazado a un *quantum* de energía disponible para *poner el cuerpo en la acción junto a otros*. Esta modalidad de protesta no es sólo la consecuencia explosiva de “estómagos encendidos” por el hambre y la pobreza que “alumbra” la hiperinflación y la recesión, sino también una re-acción cultural y de clase que indica los límites de lo soportable, aunando corporalidades que se reconocen en el cúmulo de expropiaciones sociales y energéticas que se suceden y acumulan en esta geometría de la dominación desde 1976. En otras palabras, lejos de aludir a la simple manifestación espasmódica de la desesperación colectiva que supone el hambre, los saqueos pueden interpretarse como la re-acción de sujetos atravesados por la materialidad del *cansancio de no poder más*; cansancio que no sólo impulsa la acción puntual de saquear para acumular mercaderías, sino que al mismo tiempo opera como *base sensible* para la activación de solidaridades intra-clases, cuya manifestación más significativa será el surgimiento de ollas populares en el ámbito territorial.

A principios de junio de 1989, los registros periodísticos indican que ha disminuido la *convulsión social* de los últimos días, produciéndose sólo hechos aislados y allanamientos “de rutina” en algunos puntos de la ciudad de Córdoba. Pese a la “tensa calma” que describen las noticias, el desabastecimiento reinante comienza a afectar la provisión de alimentos, incluso la efectuada por la provincia: ya no hay saqueos, pero tampoco mercaderías que apropiarse, de manera que los alimentos acopiados en el barrio –tanto los provenientes de los saqueos como los obtenidos merced a aportes privados y a los bolsones del Estado– comienzan a ser “puestos en común” en ollas populares que se instalan en lugares públicos (plazas, parroquias, escuelas, etc.) o bien en domicilios de vecinos que toman la iniciativa (por lo general mujeres).

A dos meses de los saqueos, alrededor de 160 ollas populares se distribuyen en distintos barrios de la ciudad, estimándose que unas 20 mil familias recurren a esta modalidad comunitaria para cubrir, al

menos, una comida diaria¹¹. Con aportes de parroquias, organizaciones partidarias y del propio Ministerio de Asuntos Sociales, diariamente se entregan raciones de guiso, “puchero chico” (sólo verduras), arroz con lentejas, polenta o el menú que posibilite la colecta de mercaderías efectuada el día anterior. La carne es “el gran ausente” en la dieta comunitaria, y así lo retrata la siguiente crónica periodística:

Al mejor estilo de una película del neorrealismo italiano, lo trágico se mezcla con la sonrisa. Así fue cuando familias de Villa La Toma, en la seccional 11°, comentaron que para algunos vecinos el respeto y la solidaridad encontraron el límite insalvable del hambre cuando debieron faenar un viejo caballo de un vecino y repartirse los cortes. Claro, todo esto sin el consentimiento de su propietario. El faenamiento clandestino de caballos se está convirtiendo en un recurso habitual en muchos sectores carenciados por lo barato, en términos comparativos, que resulta esta manera de acceso a la carne, insumo desterrado ya totalmente de las ollas populares. También los animales domésticos han pasado a mejor vida e ido a parar a las ollas. “El maíz está muy caro así que yo metí a la olla todos los pollos que tenía y después cobraron unos conejos que teníamos por ahí”. “En muy contadas veces llevamos carne a la olla y cuando conseguimos se trata de huesos”, señala Marta, responsable de la olla que funciona en La Toma, muy cerca de Residencial Los Robles (“Las ollas populares, el nuevo rostro de la crisis”, *La Voz del Interior*, 17/07/1989).

Al igual que en otros puntos del país, las ollas populares son una figura “novedosa” que se entrama en el paisaje urbano de Córdoba de la hiperinflación (Neufeld y Cravino, 2001; Iñigo Carrera, Cotarelo, Gómez y Kindgard, 1993). Lo que comienza siendo una iniciativa “hasta pasar la crisis”, con el tiempo se devela como una *usina organizacional* que recuerda los gérmenes de las acciones territoriales de los años '60 y principios de los '70¹². En efecto, recolectar mercaderías, cocinar, controlar las raciones entregadas y diseñar alternativas para “parar la olla” constituyen formas de gestión colectiva que se

¹¹ Según información suministrada por el Ministerio de Asuntos Sociales, el número de ollas en la ciudad descenderá a 60 en diciembre de 1989 para trepar a cerca de 90 a principios de enero de 1990 (*La Voz del Interior*, 07/06/1989, 17/07/1989 y 06/01/1990).

¹² Las estrategias organizacionales que se suceden al calor de la crisis hiperinflacionaria encuentran al menos uno de sus antecedentes en los llamados “clubes de madres” que, incluso durante los años del golpe militar, siguen funcionando en varias villas de la ciudad. Se trata de espacios colectivos encabezados por mujeres del barrio que, gracias al apoyo de iglesias y ONGs, tienen a su cargo la provisión de copas de leche, raciones alimentarias, roperos comunitarios, etc. (Cervio, 2012).

espacializan en el territorio, insinuándose como los antecedentes de los comedores y guarderías de los '90, pero también como un nuevo modo de *hacer junto a otros* que nace en y desde el barrio, inscripto en la seguridad de conocer-se y ser conocido, de cuidar-se y ser cuidado. En otro lugar (Boito, Cervio y Paz García, 2010) se han definido estas acciones como “prácticas del querer” que se expresan en y a través del cuidado de los vínculos más próximos (la familia y la gente del barrio) frente al cansancio y la impotencia que suponen las múltiples y recurrentes expropiaciones sobre las que se monta y opera la geometría de la dominación.

Al interior del barrio se configuran redes de acción y afección mínimas que, verbalizadas por los narradores como “contención” o “ayuda”, contribuyen amorosamente a cementar los hiatos que la “topadora social” deja a su paso. Estas prácticas del querer, que se manifiestan en cuidados, refieren a estados de sentir que producen formas de atravesamiento de la impotencia, en tanto actos cotidianos que activan –esperanzados– la recuperación de la capacidad de hacer en espacios muy próximos, muy cercanos. *El querer cuidar-hacer cuidados* expresa el re-direccionamiento de energías que se liberan de la sedimentación de la in-acción que se siente como cansancio.

Estas “prácticas del querer” que se espacializan en los barrios de la mano de ollas populares, pero también en huertas y almacenes comunitarios que van poblando la periferia de la ciudad hacia fines de los años '80 y principios de los '90, sintetizan dos aspectos centrales para el análisis en curso. En primer lugar, revelan la pervivencia de solidaridades intra-clases vueltas modalidades *del querer-poder-hacer* que, aun atravesadas por el cansancio sedimentado en el cuerpo, activan la posibilidad de *ser y estar para el otro y con el otro*, en tanto primer intento para la visibilización de sociabilidades de clase (próximas/cercanas) en potencia, alejadas de la resignación incondicional que supone la expansión del capital.

Por otra parte, estas prácticas se activan y operan en torno al *deseo*; un deseo posibilitado por la disposición de un *quantum* de energía social y corporal que (todavía) permite “seguir luchando para parar la olla”, pero también marcado por aprendizajes organizativos pasados que se reactualizan en el nuevo escenario. De este modo, *deseo-resto energético-cansancio* operan como la tríada vivencial y corporal que impulsa a hacer (“*lo que se tiene que hacer*”, a “*apretar los dientes y seguir con la olla, porque para nosotros no hay margen para jugar con el hambre*”¹³) en orden a “tajear” la impotencia y la resignación sedimentada como lógica de aceptabilidad y apreciación del mundo. La re-habilitación del momento político del *hacer con otros* que implica poner el cuerpo a los emprendimientos comunitarios descriptos, son percibidos como un primer paso (al límite) para contrarrestar parte de las energías de las que fueron expropiados *esos otros*

¹³ Expresiones de mujeres organizadoras de la olla popular de barrio Las Violetas (“Las ollas populares, el nuevo rostro de la crisis”, *La Voz del Interior*, 17/07/1989).

a quienes se cuida y se ayuda, es decir, los vecinos/familiares más próximos, recurrentemente referenciados por las mujeres organizadoras de las ollas populares como ocupando una posición de expulsión todavía más radical que la propia: “los que más lo necesitan”.

Desde la perspectiva apuntada, estas acciones afectivas “mínimas” que intentan atravesar la impotencia y la resignación, aparecen como modalidades de “*hacerse lugar*” o resistencia primera (por próxima/cercana) a las formas de sentir(se) en territorio que estructura el hambre en tanto espacialidad y vivencia de la ciudad¹⁴. En esta línea, lo que inicialmente puede ser significado como estrategias de supervivencia o “rebeliones del estómago” ante la imposibilidad del consumo, se entranan en solidaridades intra-clases que tienen al barrio como continente, y a lo próximo/lo cotidiano como primera “certeza” para destituir la lógica del *no-poder* que coagula la acción y restringe la posibilidad de visibilizar *otros haceres y otros sentires* alejados de la rendición incondicional.

3. Acciones colectivas alimentarias en la ciudad de Córdoba en la crisis del 2001-2002

La crisis que “sacudió” a Argentina en diciembre de 2001, puso en evidencia un profundo proceso de reestructuración del capital. La política económica neoliberal implementada sistemáticamente durante décadas se develaba sin ropajes, impactando en la vida cotidiana de millones de argentinos. El desborde de los principales indicadores económicos, junto al quiebre institucional y la movilización de amplios sectores sociales, son expresiones que sintetizan, a comienzos del siglo XXI, las múltiples expropiaciones corporales y sociales configuradas en torno al patrón de acumulación que se instala en el país con el golpe de Estado de 1976. Así, el hambre, la pobreza, la desnutrición y el desempleo se entrelazaban en la postal social de aquellos días con saqueos a comercios y supermercados, con escraches de pequeños ahorristas frente a los bancos que habían confiscado sus ahorros de toda la vida, con una intensa crisis institucional que se tradujo en el paso de cinco presidentes en tan solo doce días, con las tremebundas cifras del “riesgo país” difundidas por los medios de comunicación al ritmo del “minuto a minuto”, con el grito “que se vayan todos” que aunaba las expresiones de protesta en las principales ciudades del país. Éstas y otras escenas que se repetían en aquel diciembre de 2001 (y meses sucesivos), expresaban –sin rodeos– la remoción de los umbrales de tolerancia y soportabilidad de miles de ciudadanos frente a la obscenidad de un modelo económico que, lejos de mostrar sus límites, estaba metamorfoseándose.

¹⁴ Para un análisis de las sensibilidades que estructura el hambre en tanto política colonial, véase Scribano, Huergo y Eynard, 2010.

En términos generales, el antecedente inmediato de la “crisis del 2001” es el ciclo recesivo que se sucede entre 1998 y 2002. A lo largo de esos cuatro años, en el país se registra un fuerte deterioro de indicadores tales como la *desocupación*, que aumenta un 74.2%, la *pobreza*, que se incrementa en un 66.9%, y la *indigencia*¹⁵, que crece en un 180.8% (Lozano, 2001). Más allá (o más acá) de las estadísticas, esta crisis estructural atraviesa y reconfigura la vida cotidiana, impactando de lleno en las posibilidades de vivir-narrar el futuro (el más próximo, cercano) de los argentinos en general, y de los cordobeses en particular. Un repaso por algunos indicadores socioeconómicos señalan en esta dirección.

En efecto, vinculando Córdoba con el resto del país, se observa que en el 2001 la *pobreza* afecta al 37.1% de la población urbana argentina; estadística que en el Gran Córdoba¹⁶ alcanza al 35.1%. En el año 2002, las cifras ascienden al 55.3% y 57.1%, respectivamente. Por su parte, en el 2001 la *indigencia* atraviesa al 12.6% de la población urbana de Argentina y al 11.1% de los pobladores del Gran Córdoba. En el año 2002, la situación de indigencia se agrava aún más hasta alcanzar al 26.2% y 27.6%, respectivamente (González, 2009).

Según Ojeda, Pereyra y Gontero (2005), en octubre de 2001 un 36.2% de los habitantes del Gran Córdoba son pobres y un 12.0% indigentes. Luego de la devaluación de la moneda registrada durante el año 2002, se verifican incrementos en los precios de los bienes que componen la canasta básica alimentaria utilizada para establecer el umbral de pobreza¹⁷. Debido a que no se producen aumentos similares en los salarios, se genera un importante (y evidente) deterioro del poder adquisitivo que se

¹⁵ Según la definición del INDEC, la Línea de Pobreza (LP), se elabora en base a datos de la EPH. “A partir de los ingresos de los hogares se establece si éstos tienen capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. El procedimiento parte de utilizar una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.) con el fin de obtener el valor de la Canasta Básica Total (CBT). Para calcular la incidencia de la pobreza se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la CBT; para el caso de la indigencia, la proporción cuyo ingreso no supera la CBA”. Para mayor información, véase: http://www.indec.mecon.ar/desaweb/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=27&id_tema_3=64 Fecha de consulta, 30/08/2014 y http://www.indec.mecon.ar/desaweb/ftp/cuadros/sociedad/informe_canastas_basicas.pdf Fecha de consulta: 30/08/2014.

¹⁶ De acuerdo con el INDEC, el conglomerado Gran Córdoba está constituido por la ciudad capital de la provincia, junto a otras 12 localidades a las que se encuentra unida, de acuerdo al criterio de continuidad física (La Calera, Villa Allende, Río Ceballos, Unquillo, Salsipuedes, Villa El Fachinal-Parque Norte-Guiñazú Norte, Mendiolaza, Saldán, La Granja, Agua de Oro, El Manzano y Canteras El Sauce) (INDEC, 1998).

¹⁷ Según el INDEC, la definición teórica vigente de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se realizó en función de los hábitos de consumo de la población objetivo, de acuerdo a requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre adulto, de entre 30 y 59 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades. Para una definición detallada véase: http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/74/informe_canastas_basicas.pdf Fecha de consulta: 30/08/2014.

traduce –entre otras consecuencias– en un incremento significativo en la cantidad de pobres que habitan el Gran Córdoba; aumento que un año después significará que un 58.5 % de la población se encuentre en esta situación. En tanto fenómeno complejo e integral, el incremento de la pobreza registrado en Córdoba durante el período 2001-2002 también reconoce entre sus causas las elevadas tasas de desempleo. En efecto, en octubre de 2001, la cantidad de cordobeses que buscan empleo sin conseguirlo se sitúa en el 16% para ascender al 19.4% un año después. Según Ojeda, Pereyra y Gontero (2005), ese porcentaje representa una subestimación, pues de acuerdo al método de medición y clasificación operado por el INDEC se incluyen como “ocupados” también aquellos cordobeses que reciben el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD)¹⁸.

Dada su magnitud y profundidad, la llamada “crisis del 2001-2002” es susceptible de ser analizada a partir de múltiples y variados anclajes empíricos; multiplicidad que alude al carácter estructural y sintomático de un modelo de acumulación que, instaurado “a sangre y fuego” con la última dictadura militar, proseguirá con sus (re)estructuraciones en los años ’80 y ’90, para “reacomodarse” a comienzos de la década del 2000, al costo de la muerte social de millones de argentinos. Uno de los “andares” posibles que habilita y sugiere el abordaje de este período de la historia social argentina es el referido a la problemática alimentaria, en tanto indicador significativo (aunque no excluyente) del deterioro de las condiciones materiales de existencia que opera como *recurso-resultado* de las políticas de los cuerpos-emociones¹⁹ que supone el andamiaje neoliberal.

Si bien la crisis 2001-2002 afectó el acceso concreto a los alimentos y deterioró cualitativa y cuantitativamente la dieta de amplios sectores de la población, el contexto alimentario nacional del período no puede comprenderse sin considerar el “arrastre” de conflictos que en este sentido se venían

¹⁸ Sintéticamente, el PJJHD representa el ejemplo por antonomasia de *programas de transferencia condicionadas* (PTC) de ingreso en el país. Como indican Arcidiácono *et. al* (2011), el PJJHD surgió en 2002 en el máximo momento de crisis social y económica. Otorgaba una ayuda no remunerativa de casi 50 dólares a las jefas y jefes de hogar desocupados, a cambio de una contraprestación (productiva, de terminalidad educativa o de interés comunitario). A los pocos meses de su implementación, el Plan benefició a más de medio millón de personas, y en los primeros meses del 2002 (presidencia de Eduardo Duhalde) llegó a cubrir a más beneficiarios que los sostenidos en planes de empleo instrumentados durante la década del ‘90. Hacia el 2005, se produjo la redefinición del plan con la implementación del *Programa Familias por la Inclusión Social* (PF), con la finalidad de transferir grupos de destinatarios del PJJHD, principalmente mujeres de bajo nivel educativo y con importante número de hijos(as). Particularmente, con el PF se buscaba fortalecer las condicionalidades en salud y educación a través de una transferencia monetaria mensual, graduada por la cantidad de hijos, que no requería contraprestación laboral, sino sólo certificación de la asistencia escolar y los controles sanitarios de los hijos e hijas a cargo.

¹⁹ Las políticas de los cuerpos refieren a “*las estrategias que una sociedad acepta para dar respuesta a la disponibilidad social de los individuos* [convirtiéndose en] un capítulo, y no el menor, de la estructuración del poder. Dichas estrategias se anudan y “fortalecen” por las políticas de las emociones tendientes a regular la construcción de la sensibilidad social” (Scribano, 2009:146. (Las cursivas, se derivan del original).

sucedendo y acumulando desde varias décadas atrás. Tal como sostienen Maceira y Stechina (2008), en Argentina existe una serie de problemáticas alimentarias de larga data: la anemia por deficiencia de hierro, la desnutrición crónica y la obesidad. Se trata de fenómenos íntimamente relacionados con el nivel socioeconómico que han persistido durante los últimos 25 años de intervenciones en materia alimentaria. Algunos datos empíricos dan cuenta de esta situación a nivel nacional y local:

- La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS, 2005) –uno de los pocos estudios realizados en su tipo– al observar niños y niñas de 6 meses a 5 años, da cuenta de una baja prevalencia de desnutrición aguda²⁰ y una marcada prevalencia de desnutrición crónica²¹, coexistiendo con crecientes niveles de sobrepeso y obesidad²² y deficiencias de micronutrientes²³, principalmente anemia por déficit de hierro.

La desnutrición aguda brinda un margen de acción, la crónica no. En Argentina, 1 de cada 10 niños/niñas pasaron el punto de “no retorno”. La desnutrición crónica implica un menor crecimiento físico, un menor desarrollo mental y una mayor predisposición a enfermarse y morir. Estas consecuencias son irreversibles: menos habilidades físicas y mentales (inteligencia, innovación), se traduce en la perpetuidad dentro del círculo de la pobreza. El peso se recupera rápidamente ni bien se mejora la alimentación, la talla no: esto puede observarse en las estadísticas que reflejan niños/niñas petisos con sobrepeso u obesidad²⁴. Lo mismo ocurre con la desnutrición acontecida durante la gestación: las secuelas quedan de por vida para esos niños/niñas y, a su vez, se incrementan los riesgos para la salud y vida de las madres (ENNyS, 2005).

- El trabajo de Oyhenart *et. al* (2008) sobre el estado nutricional infanto-juvenil en seis provincias argentinas, indica que las prevalencias de malnutrición muestran diferencias regionales: mientras la desnutrición decrece de Norte a Sur del país, el sobrepeso-obesidad registra una situación inversa: mayor en el Sur y menor en el Norte.
- En una noticia publicada por el diario local *La Voz del Interior*²⁵, la Dirección de Atención Primaria de Salud de la Municipalidad de Córdoba ofrece cifras inquietantes: en el año 2002, sus centros periféricos de salud habían atendido y registrado 5.475 niños de 0 a 5 años con diversos grados de

²⁰ Presenta prevalencias marginales: 1,4 %, es decir, aproximadamente 1 de cada 100 niños/niñas de Argentina en el año 2005 presenta desnutrición aguda (bajo peso para su talla).

²¹ Uno/a de cada 10 niños/niñas de Argentina, presenta desnutrición crónica (baja talla para su edad).

²² Uno/a de cada 10 niños/niñas de Argentina, presenta obesidad (exceso de peso para su talla). La prevalencia de esta última en niños y niñas tiende a ser más elevada en aquellos hogares con privación socioeconómica: situación particularmente observada en las regiones del Noreste, Noroeste y Pampeana (esta última incluye a Córdoba).

²³ La prevalencia de anemia por déficit de hierro, considerada una forma de desnutrición oculta por falta de micronutrientes (en este caso, el hierro), en los niños/niñas de 6 a 23 meses es de 34,1 %; porcentaje que desciende a 8,9 % en los niños/niñas de 2 a 5 años. La anemia guarda relación con la ingesta de nutrientes específicos –en este caso el hierro– así como con las condiciones socioeconómicas.

²⁴ Este fenómeno con los niños también ha sido descripto con la categorización de “petisos sociales” (Britos *et. al*, 2003).

²⁵ Véase: “3052 chicos con problemas de nutrición en siete meses”, en *La Voz del Interior*, 02/08/2003.

desnutrición. Según información oficial, el cuadro de situación local exhibía un notable incremento respecto al 2001.

- Algunos informes elaborados por *Cáritas* grafican desde otro ángulo la cuestión alimentaria en la ciudad de Córdoba en los momentos más críticos del 2001-2002, explicitándose dificultades vinculadas a una excesiva demanda en sus comedores. Así, la institución da cuenta de a) una “alta demanda de cobertura nutricional de adultos y niños de 6-12 años”, viéndose excedidos organizacionalmente para satisfacer dicha demanda en un porcentaje entre el 102% y 124%; b) carencia de subsidios; c) problemas con los equipos técnicos por falta de pago; d) presencia de “líderes autoritarios” en las organizaciones (situación que condujo a planificar “talleres de liderazgo”); y e) “escasa participación de los padres”.

En la misma línea problemática, ligada al exceso de “demanda” y a la situación “crítica” en los centros comunitarios de *Cáritas*, un informe del 2002 dirigido al Ministerio de la Solidaridad provincial explicita:

En general el resto de los Centros Comunitarios no inscribe nuevas personas y simplemente cierra las posibilidades de incluir a otros grupos etarios porque no tienen posibilidades concretas de atenderlos, no sólo por la infraestructura y la propia organización, sino fundamentalmente porque no disponen de otros recursos para la alimentación.” Además, “Muchos Centros no llevan registros de la demanda de ningún tipo porque se evita generar expectativas en la gente, pero absolutamente todos detectan un aumento en la demanda de la población adulta, con [un] serio aumento en adolescentes²⁶.

En este contexto, miles de niños/niñas con desnutrición crónica y aguda, anémicos, obesos y con sobrepeso, carentes de los nutrientes básicos necesarios para su desarrollo físico-cognitivo-emocional; comedores comunitarios que se reconocen excedidos (económica, organizacional e infraestructuralmente) para cubrir las crecientes demandas alimentarias de niños, jóvenes y adultos; instituciones sociales que ven multiplicar sus tradicionales “rubros” de atención, desarrollando en simultáneo múltiples estrategias de gestión de recursos que posibiliten acompañar sus actividades con (al menos) algún grado de eficiencia, etc. son algunos indicadores “territoriales” del avance del hambre que se configura como fondo y contenido de la llamada “crisis del 2001-2002”. Fondo y contenido que, lejos de apreciarse como una “problemática novedosa” que algunos medios de comunicación del período espectacularizan con un atisbo de “sorpresa” horrorizante, muestra sin tapujos la profundización de un

26 Cita extraída de un documento técnico facilitado por un informante clave de *Cáritas Córdoba*. Para un análisis más profundo de la problemática manifestada por la aludida institución, véase: Eynard, 2013.

modelo de acumulación de larga data que hace de la expulsión y muerte de miles la condición básica para su reproducción.

En este marco, el fenómeno de la soja se posiciona en la agenda política e institucional del momento como el gran “mesías” que coadyuvaría a revertir los obscenos índices de desnutrición y malnutrición que azotaban al país. Sin embargo, el caso argentino tiene el “obsceno lujo” de ser el ejemplo por antonomasia de cómo generar un abismo brutal entre una producción y exportación mundial superavitaria de alimentos, por un lado, y la situación de malnutrición y hambre de amplios sectores de la población, por el otro.

En efecto, la emergencia de la soja como “suturador” del conflicto del hambre en el país es sintomático: los sectores más ricos, vinculados al modelo agroexportador, ofrecen alimento (de pobres) a los pobres a través de sus socios locales. Dada su abundancia en tanto producto de exportación generador de divisas, la soja es utilizada para saldar las demandas alimentarias de muchos comedores populares. Sin embargo, al poco tiempo comienzan a observarse las consecuencias del (ab)uso (in)apropiado de este alimento, por ejemplo, en los niños menores de dos años. En esta línea, los trabajos de Walter Pengue (2004) y otros grupos (Viñas, 2005), denotan el impacto negativo de planes tales como “*Soja Solidaria*”²⁷ (que también se implementó en Córdoba a través de *Cáritas* y el *Banco de Alimentos*), y su vinculación con la (in)seguridad alimentaria.

En otro lugar (Scribano, Huergo, Eynard, 2010), se ha propuesto que la soja es “EL” mitologema de la narración colonial del siglo XXI en Argentina. Es el resultado de la combinación de las industrias extractivas en varios de los componentes de su cadena de valor (petrolera, petroquímica, insecticida) y las industrias agro-exportadoras (industria metal-mecánica, siembra directa, fumigación). Todas esas fracciones de clase tienen un acuerdo: la soja es fuente de riqueza. Sin embargo, lo que se expone con claridad es que la soja no es compartida en lo que tiene de riqueza, sino en lo que reparte de miseria: la geopolítica del hambre es una cartografía de las políticas coloniales como formas de territorialización de las expropiaciones de energías.

Desde otro punto de vista, en una entrevista realizada en 2010 (Eynard, 2010), Edgardo Lander sostiene que si bien en la actualidad el hambre no parece tener la visibilidad que tuvo durante el 2002 y 2003, en Argentina existe un fenómeno de *negación colectiva* de la problemática, es decir, una negación que

²⁷ El “Plan Soja Solidaria” comienza a implementarse a principios del año 2002. Es una iniciativa de la AAPRESID (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa) que cuenta con el asesoramiento técnico de la SADESO (Sociedad Argentina para el Desarrollo y el Uso de la Soja). Quienes integran estas ONG’s asociadas son las grandes empresas productoras de trigo y soja transgénica de Argentina. Véase: “El año de Soja Solidaria”, artículo de Víctor Trucco, presidente de AAPRESID, en diario *Clarín* del 11/01/2003. <http://www.clarin.com/suplementos/rural/2003/01/11/r-00801.htm> Fecha de consulta, 28/02/2010.

opera *qua* conjuro, en el sentido de negar para que no suceda: *impedir, evitar, alejar un daño o peligro*. Por su parte, Matías Bruera indica la contradicción entre el mundo *gourmet* y el hambre, como un plano (otro) de existencia de contradicciones sociales más amplias: “de la misma manera que la frugalidad sólo es posible para quien no tiene apetito, el lujo es incomprendible sin el hambre. En el presente, la ideología fundamentalista del mundo *gourmet* es la más plena representación de una actitud reaccionaria y oclusiva ante la *producción* de miseria” (Bruera, 2005: 21; las cursivas, se derivan del original).

En suma, el fantasma del *hambre* es el reverso solidario y constituyente de la enunciación fantasmática “*la Argentina es tan rica*” (Scribano, 2005). La expropiación desigual de los alimentos (entendidos como bienes comunes) por parte de unos pocos, obstaculiza que la gran mayoría produzca y consuma la energía corporal necesaria para garantizar la producción y reproducción de sus condiciones biológicas y materiales de existencia. El hambre, por lo tanto, es una agresión colonial estrictamente necesaria para mantener el orden imperial; queda instalado como una inevitabilidad capitalista porque la máxima es la “expropiación de la energía del otro” (tanto de plusvalía corporal como natural). El sobrevivir de muchos cuerpos que yacen en la línea divisoria entre la vida y la muerte, el bienestar y el malestar, es la postal más nítida de la anterior situación (Scribano, Eynard, Huergo, 2010).

Considerando el contexto crítico antes descripto –no sin reconocer la multiplicidad de aristas que el fenómeno de la crisis alimentaria requiere atender en orden a lograr una comprensión integral de la complejidad que le es inherente– en lo que sigue se presentan algunos resultados vinculados a la conflictividad general que (se) tramó (en torno a) la problemática del hambre y la malnutrición en el escenario cordobés del período 2001-2002. Las reflexiones que se presentan a continuación toman como insumo una base de datos sobre *eventos de acción colectiva alimentaria* en la Ciudad de Córdoba elaborada a partir del relevamiento hemerográfico del periódico local *La Voz del Interior*.²⁸

De acuerdo con Alberto Melucci (1996), la acción colectiva implica y es el resultado de procesos de *interacción, negociación y conflicto*. Es la resultante de *metas, recursos y límites* puestos en juego por los actores a la hora de orientar su acción, definiendo cognitivamente y afectivamente el campo de *oportunidades y restricciones* existentes para la misma. En esta línea, toda acción colectiva es precedida y presidida por uno o más conflictos que, ocluidos o manifiestos, advienen condiciones de posibilidad para la producción/reproducción de las primeras. De lo expuesto, se desprende que cada acción colectiva está ligada a una *red de conflictos*, es decir, que las relaciones implicadas en ella siempre remiten a tejidos conflictivos anteriores que, de alguna manera, dan sentido a las luchas reivindicativas actuales. Como

²⁸ Para un análisis más detallado de las acciones colectivas alimentarias que tienen lugar en la Ciudad de Córdoba durante el período 2001-2007, véase: Eynard, 2013.

afirma Scribano: “una red de conflictos da posibilidades de visibilidad a otra red de conflictos que, sumergida o velada, está potencialmente instalada en las relaciones sociales cotidianas” (2003: 121).

En esta línea, emergen los conceptos de *sentido* y *límites del sistema*. En efecto, una de las potencialidades de la acción colectiva radica en su capacidad de otorgar visibilidad al punto hasta donde llegan los mecanismos de resolución de conflictos institucionalizados en la estructura social. Así, las acciones colectivas son señales o *profetas* –al decir de Alberto Melucci (1989)– de los grandes dilemas que atraviesan a la sociedad en un tiempo-espacio determinado; en otras palabras, “comunican” cuestiones que trascienden lo que en apariencia es una problemática particular, mostrando los límites de la sociedad para “resolver” por vías tradicionales los conflictos que se le presentan. En este marco, Melucci (1991) asocia dichas señales con los “límites de compatibilidad sistémica”²⁹ puestos en evidencia por toda acción colectiva. Estos límites hacen referencia a los “bordes de la sociedad” en los que aparecen conflictos no esperados, y por lo tanto no previstos en los mecanismos de resolución. Estas fronteras son vulneradas por la irrupción de la acción, lo cual exige la redefinición, modificación o disolución de la estructura del sistema. En este sentido, la aludida categoría melucciana es clave para comprender la dinámica de la problemática alimentaria en Córdoba, pues es la carencia de alimentos, en vinculación con la conflictividad social asociada a ella, la que marca ese límite, forzando al sistema político a generar una batería de respuestas para “enfrentar” una cuestión candente y potencialmente (aún más) explosiva.

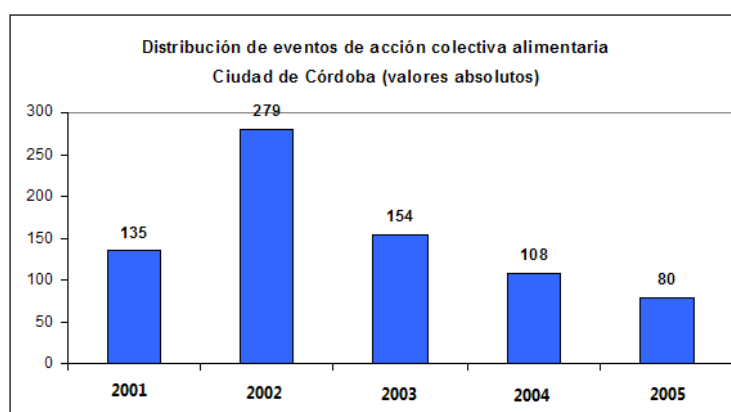
Además de estas definiciones teóricas, para la confección de la base de datos antes referida se asoció el término “evento” con el de “protesta”, ya que por definición un evento es algo que tiene un comienzo y un fin, determinándose qué se entiende por comienzo y finalización para acotar temporoespacialmente el fenómeno a registrar (Rucht *et al.*, 1999). Particularmente, en términos del registro efectuado, lo “alimentario” se definió por el *tipo de demanda*, es decir, por la demanda de alimentos –en sentido amplio– en un contexto de carencia. Específicamente, las categorías construidas (*ex – post*) incluyeron: reclamos de alimentos *per se*, planes sociales, cese del ajuste/ justicia social, transparencia en la gestión de los planes/programas sociales, reclamo de trabajo, y reducción/control de los precios de los alimentos.

En términos de los resultados obtenidos, durante el 2001-2002, se observa un ascenso “brusco” en las frecuencias de los eventos; situación que evidencia un claro ciclo de “intensificación” de la protesta social en la ciudad de Córdoba. Posteriormente, se registra un declive en la “virulencia” de las acciones vinculadas a lo alimentario; fase en la que va perdiendo relevancia la protesta callejera y

²⁹ Por “límites de compatibilidad”, Melucci entiende: “quella gama di variabilità degli stati sistemici che permette a un sistema di mantenere la sua struttura, cioè l’insieme di elementi e relazioni che lo identificano come tale” (Melucci, 1991: 49).

ganando visibilidad estrategias de “negociación” en las oficinas públicas encargadas de canalizar la resolución de este tipo de demandas.

En otras palabras, en el 2001 ($n = 135$) se observa un momento de crecimiento de la protesta que llega a su punto más álgido en el año 2002 ($n = 279$), para comenzar a decrecer en el 2003 ($n = 154$) hasta alcanzar niveles similares a los del 2001. La lectura de esta dinámica debe efectuarse en el marco del proceso del movimiento piquetero cordobés y de otros movimientos de base y sindicales que convergieron (no sin dificultades internas) en la protesta por la cuestión alimentaria (Eynard, 2013).



Fuente: Elaboración propia en base a *La Voz del Interior* (2001-2005).

En función del marco teórico anteriormente señalado, es importante destacar que la conflictividad social efectúa movimientos “pendulares” entre momentos de visibilidad y de latencia (Scribano, 2003). Tal dinámica se expresa de varias maneras, por ejemplo, a través de cambios en lo que hace a las modalidades de acción, demandas, protagonistas y antagonistas. Por lo tanto, más que referir a una lisa y llana “desaparición” (y para prevenir de la ilusión acerca de algún tipo de “resolución”) de la problemática, se reconoce (más) consistente proponer el acaecimiento de “mutaciones” en las formas de expresión y visibilidad de esta red conflictual a lo largo de la serie considerada.

En cuanto a los *actores*, en el 2001 el “movimiento piquetero/organizaciones de base/vecinos/beneficiarios de planes sociales/asistentes a comedores”³⁰ protagonizan el 49% de las

³⁰ En orden a sintetizar los desempeños de los actores mencionados en relación a las protestas alimentarias que tienen lugar en la ciudad de Córdoba, y dada las limitaciones de espacio para desarrollarlas de manera individual, en este documento se ha decidido agruparlos en una única categoría de análisis. Dicho agrupamiento ha sido efectuado en función de los posicionamientos actorales respecto a la demanda, es decir, sea como beneficiarios de

acciones registradas, mientras que en el 2002 los mismos ocupan el primer lugar dentro de la nómina actoral, con un 57%. Los “trabajadores y estudiantes”, que en el 2001 se posicionan al frente del 27% de los eventos identificados, en el 2002 protagonizan sólo el 9% de los mismos. Las “ONG’s e iglesias”, mantienen un rol protagónico similar en ambos años (12%). El “gobierno” (nacional-provincial-municipal), en tanto actor, protagoniza el 4% de las acciones en el 2001 y el 13% en el 2002. Finalmente, los “partidos políticos” mantienen una mínima participación a lo largo del período considerado: del 4% en el 2001 y 3% en el 2002.

Por su parte, en el período 2001-2002 la posición de *antagonista* de las acciones colectivas alimentarias registradas en Córdoba se estructura llamativamente en torno a “la crisis” propiamente dicha³¹. En cambio, cuando los actores protagonistas de los eventos sindicados uno o varios actores –y ya no a la indeterminada “crisis” como “responsable” de los conflictos alimentarios–, la figura del *Estado*, en sus diversos estamentos, adviene central. Es decir, la crisis (y el compromiso de su mentada “resolución”) se “encarna” colectivamente en la figura del Estado, fundamentalmente el Nacional, quien es reconocido como el principal antagonista directo en este entramado conflictual. Así, en el 2001, los principales actores que ocupan la aludida posición son la “Nación” (44%), seguida en términos relativos por la “Provincia” (30%) y, en menor medida, por las “Empresas privadas” (16%). En el 2002, en cambio, esta estructura posicional muestra algunas variantes, emergiendo la siguiente distribución: “Nación” (29%), “Provincia” (28%) y “Municipalidad” (11%), entre los más relevantes.

La *demanda* principal es el “alimento”, seguido por los “planes sociales” y el pedido de “cese del ajuste y justicia social”. Cabe destacar que la primera acumula 1/3 de las demandas totales de este tipo registradas en el período 2001-2002. Por su parte, se observa una relación inversamente proporcional entre la demanda “planes sociales” y la “transparencia en la gestión de los planes/programas sociales”: mientras se demandan más planes, se exige menos transparencia en la gestión de los mismos, y viceversa. Por otro lado, al cruzar demandas y actores protagonistas, se verifica que los principales reclamos de los piqueteros cordobeses son “alimentos” y “planes sociales”, seguidos por la exigencia del “cese del ajuste/justicia social”, siendo el reclamo por “trabajo” uno de los grandes ausentes relativos, al menos durante los años considerados.

planes, demandantes de alimentación, asistentes a comedores, o vecinos de la ciudad que, de una manera u otra, reclaman la asistencia de diversos efectores para la cobertura de tal derecho.

³¹ Como se mencionara, las categorías de las variables que componen la base de datos fueron elaboradas *ex post*, a partir del análisis de contenido de las noticias publicadas por el diario *La Voz del Interior*. En esta línea, y considerando como “voces de los actores” las expresiones entrecomilladas presentadas por el periódico –con todas las salvedades epistemológicas que supone el hacer uso de la prensa para concretar el estudio de acciones colectivas–, se obtuvo que, en líneas generales, para los colectivos cordobeses el antagonista por excelencia era la situación de “crisis”.

En cuanto a las *modalidades de acción* puestas en juego por los actores para expresar/movilizar sus respectivas demandas alimentarias, durante el año 2001 se observa la prevalencia de la “publicación de documento/entrevistas con la prensa” (26%) y “corte de ruta-calle/marcha/manifestación” (24%), seguidos por “saqueos” a comercios y supermercados (20%). En 2002, de la mano con la intensificación del ciclo de protestas, los “cortes de ruta-calle/marcha/manifestación” se posicionan en primer lugar con un 38%; modalidad seguida, en términos relativos, por “publicación de documento/entrevistas con la prensa” (18%) e “iniciativa administrativa/de gestión” (8%).

Respecto a los saqueos, es importante destacar que si bien los medios de comunicación del período los “muestran” como uno de los hechos más contundentes de “la crisis” a nivel nacional y local, en términos estadísticos se concentran en diciembre de 2001, afectando fundamentalmente a comercios de medianas y/o pequeñas dimensiones, no así a las grandes superficies que fueron fuertemente custodiadas por la policía provincial.

Del mismo modo que en 1989, los saqueos que se producen en Córdoba a comienzos del siglo XXI son descritos por la prensa a partir de una argumentación que enlaza el hambre, la crisis y la pobreza con la *irrupción* (cuasi “mágica” y “desprevenida”) del caos, el desborde y la violencia (esa que se mira por TV o que se lee en los diarios) *como si* se tratara de respuestas sociales inconexas, desconcertantes, pero no por ello menos peligrosas y amenazantes para la “paz social” de la ciudad. En esta línea, no sorprende que los registros periodísticos se hayan “abstenido” de publicar aspectos vinculados a prácticas de solidaridad intra-clase que coadyuvaron al despliegue de dichas acciones colectivas.

Así, a contramano de la lógica criminalizante propuesta por los medios de comunicación del período, es dable trazar y reconstruir algunos nodos “solidarios” que acompañaron los saqueos del 2001 recurriendo para ello a los relatos de algunos de sus protagonistas. Voces que, desde sus particulares tonos, enuncian una serie de “reglas a respetar” respecto a los sitios que pueden/no pueden ser saqueados, así como a las prácticas de organización comunitaria “esperables”/”compartidas” que actualizan entre los sectores populares cordobeses la lógica del *don* y del *contradon* (*sensu* Mauss) ya observable en los episodios de fines de los ’80 analizados en el apartado anterior.

En el siguiente relato, una referente comunitaria de Villa La Tela se refiere a algunas prácticas de solidaridad y de “códigos” en la dinámica del saqueo del 2001 con respecto al comedor del barrio:

AD: Porque tienen códigos y tienen que llegar. Que por ahí al principio a mí no me daban mucha bola porque yo no era nadie. El comedor es de la Rosita y punto, ¿me entendés? Y

ni siquiera era la Rosita, es “la tía Rosita”. Y nadie toca el comedor, ni a la tía Rosita o nada de lo que hay adentro.

Entrevistador: o sea que en los momentos en los que estaban los saqueos, el comedor nunca fue blanco de nada.

AD: Nada. Yo siempre digo, más que blanco de nada, era la meca, para decir, “mire tía, saq... conseguimos esto, le dejamos esto” (...) porque eso habla de lo que te digo de los códigos... (Mujer, 35 años, Villa La Tela).

Además del acto mismo de “saquear”, la participación en esta clase de prácticas requiere una organización previa, vinculada al hecho de “hacer correr la noticia de boca en boca” y conformar una masa crítica de personas para concretar la acción. Asimismo, durante el episodio, se ponen en juego diversas estrategias de cuidado colectivo que implican “poner el cuerpo” para salvaguardar la seguridad física de los participantes, expuestos (en muchos casos) a los disparos con armas de fuego de las fuerzas de seguridad. En esta línea, son elocuentes las palabras de una referente del barrio Guiñazú quien, recordando los saqueos, reconstruye algunos lazos de solidaridad y organización comunitaria que operaron (in situ) tras el baleo de un vecino por parte de efectivos policiales:

C: (...) Y cuando se vinieron de aquella parte, ya esta parte también se vino. Empezó a correrse así, “de boca en boca”, que a tal hora iban a hacer eso, ¿viste? (en esa época sin los celulares), fue de boca en boca... (...) Al chico (Brian³²) le pegaron el tiro en aquella cuadra, en la esquina (...) Y mandaron Guardia de Infantería... pero mucha gente se quedó, se quedó, más después que pasó eso (que lo hirieron a Brian), estaba lleno de gente, todo, todo... se cortó todo (señala la Av. Juan B. Justo) (...) En esa época era el único supermercado que había acá, era el único, ¡se rompió todo! (ríe). Además había gente ya adentro, empezó a entrar gente “como a comprar”, empezaron a entrar “a comprar”, “a comprar”, “a comprar”, y las otras estaban afuera... en las otras partes, esperando. De a poco entraron (...) Cuando fue lo del chico (Brian) todos tuvieron la misma reacción, todos salieron a la calle (a protestar). El súper abría más o menos a las cuatro (de la tarde), habrá sido más o menos en ese horario (lo de Brian), pero nos quedamos después hasta tarde, nueve, diez de la noche (...) Al super después, había días que lo cerraron, porque había temor de que “iban a volver”, entonces lo cerraban. Si había rumores, lo cerraban. Y

³² El 19 de diciembre de 2001, Brian Barrera fue herido de bala de plomo por la policía de la provincia de Córdoba en ocasión del saqueo a un supermercado en barrio Guiñazú. El joven sufrió una contusión pulmonar; posteriormente, se recuperó.

policía y gendarmería han venido después a custodiarlo. Pero fue esa vez nomás, después no. (Mujer, 43 años, Barrio Guiñazú).

En base a estos relatos, es posible redoblar la apuesta interpretativa considerando a los saqueos del 2001 no sólo como una “explosión de estómagos furiosos” (*sensu* Thompson), sino también como la puesta en práctica de una serie de solidaridades intra-clase basadas en la reciprocidad de la lógica del don y del contradon que operaron no sólo como estrategias de supervivencia sino como superficie de inscripción para la renovación de vínculos comunitarios en un contexto crítico para los sectores populares cordobeses; solidaridades que tenían, a su vez, una trayectoria e historia común.

4. A modo de cierre

El recorrido realizado señala que el deterioro del mercado laboral, la concentración del ingreso y el régimen de alta inflación característicos de la década del '80 se inscriben en la cartografía social de la ciudad de Córdoba, evidenciando los procesos de reestructuración socio-económicos inaugurados por la dictadura y profundizados por la gestión constitucional.

Los episodios de saqueos que tienen lugar durante el estallido hiperinflacionario de 1989 enuncian algunas “líneas de continuidad” estructurales que se perciben entre la última dictadura y el primer gobierno de la democracia recuperada: el desmantelamiento del aparato productivo, la liberación de la economía, el régimen de alta inflación, la caída de los salarios, la precarización del mercado laboral, entre otras. Estos procesos, que persisten con mayor o menor nivel de intensidad durante toda la década, se develan –sin desvíos– durante la crisis hiperinflacionaria de 1989, dando lugar a re-acciones colectivas que manifiestan el cansancio con-tenido por años de recesión económica y expulsión social, entrelazado a un *resto* de energía disponible para *poner el cuerpo en la acción junto a otros*. Así, durante y después de la “ola de saqueos”, en Córdoba se observa la emergencia de una serie de estrategias comunitarias vinculadas a la activación de solidaridades intra-clases, cuya manifestación más significativa será el surgimiento de ollas populares. Instancias organizativas que operarán como antecedentes de los comedores y guarderías que se extenderán durante toda la década del '90 en el ámbito territorial.

En efecto, los saqueos a comercios y supermercados que se suceden en la periferia de la ciudad durante 1989 son protagonizados por cuerpos desocupados, precarizados, expulsados de consumos básicos, cancelados en (por) su “pura” alteridad (amenazante y sospechosa). Cuerpos que sintetizan el contexto general de estancamiento productivo, concentración del capital y expulsión social

característicos de la transición democrática. Aunados en su corporalidad residual, los sujetos de la periferia son objeto de una política de los cuerpos³³ que los recluye y los con-tiene en los límites físicos y simbólicos de la cartografía urbana, estructurando estados del sentir que conectan la falta con la vivencia de la ciudad que se (les) niega. Sin embargo, esta lectura ausentificadora que hace del cúmulo de ausencias pasadas, presentes y futuras un vector de estructuración, señala asimismo la potencia de las faltas, sea para la coagulación de la acción o bien para la emergencia de prácticas que activan – esperanzadas– la recuperación de la capacidad del hacer *con otros y para otros* en espacios muy próximos, muy cercanos.

Este mismo juego de ausencias/re-acciones colectivas, se actualiza años más tarde en los episodios de saqueos que se producen en Córdoba durante 2001-2002, mostrando la remoción de los umbrales de tolerancia y soportabilidad de esos cuerpos históricamente precarizados, condenados a recluirse en los bordes de la ciudad.

Como se anunció, a partir de 1998 se inicia un nuevo ciclo recesivo que “explotará” con la llamada “crisis del 2001-2002”, entramando en sus propias particularidades las metamorfosis del régimen de acumulación instaurado en el país a partir del golpe de 1976. Concretamente, a comienzos del nuevo siglo, la mitad de la población argentina es pobre y un cuarto indigente. Esta situación se replica sin excepciones, incluso en el “archipiélago cordobés”, ocupando la cuestión alimentaria un sitio nada despreciable en lo que hace a la configuración de este escenario crítico. En efecto, durante los primeros años del siglo XXI, se intensifican problemáticas de larga data (anemia por deficiencia de hierro, desnutrición crónica y obesidad) que hacen que los “rostros del hambre” adquieran otras (¿nuevas?) formas, pero una presencia ininterrumpida en el escenario social de un país “superproductor de alimentos” en el que amplios sectores de su población padecen hambre.

Los límites sociales, materiales y corporales del hambre “explotan” en el caluroso diciembre de 2001, “reverdeciendo” los saqueos como prácticas colectivas que, orientadas como una re-acción frente al hambre y al cansancio con-tenido, actualizan el cúmulo de ausencias estructurales que se suceden, al menos, desde 1976.

A partir de los relatos de sus protagonistas, en este Documento de Trabajo se reconstruyeron algunos saqueos ocurridos en la periferia de la ciudad de Córdoba con la intención de mostrar, a contramano de la lógica espectacularizante y criminalizante de los medios de comunicación, una serie de

³³ Las políticas de los cuerpos refieren a “*las estrategias que una sociedad acepta para dar respuesta a la disponibilidad social de los individuos* [convirtiéndose en] un capítulo, y no el menor, de la estructuración del poder. Dichas estrategias se anudan y “fortalecen” por las políticas de las emociones tendientes a regular la construcción de la sensibilidad social” (Scribano, 2009:146. Las cursivas, tomadas del original).

solidaridades intra-clase que acompañaron los episodios de 2001; nodos “solidarios” que vienen a escenificar (actualizándolas) estrategias comunitarias ligadas al *cuidado de otros en espacios próximos/cercanos*, ya observables en la década del ‘80, tal como se ha sugerido.

Así, los saqueos que acompañan el estallido hiperinflacionario de 1989 y los que emergen como respuesta a la crisis económica y social del 2001-2002 otorgan visibilidad a un concreto y complejo “Mundo del No” en el que los sectores populares se hallan acorralados de manera persistente desde hace décadas. Este mundo de negaciones (no hay trabajo, no hay salud, no hay alimentos, no hay educación, no hay...) opera cual “capas geológicas”, performando y estructurando la vida, las sensibilidades y prácticas de cuerpos apostados en los bordes de la sociedad. En suma, se trata de un *increscendo* de ausencias que, objetivadas en las estadísticas y corporizadas por los sujetos como parte de su propia reproducción cotidiana, se instancian en los años ‘80 como anticipaciones estructurantes de las expulsiones de los ‘2000.

5. Bibliografía

ARCIDIÁCONO, Pilar, PAUTASSI, Laura y ZIBECCHI, Carla (2011) “Respuestas estatales en torno a la alimentación y al cuidado: los casos de los Programas de Transferencia Condicionadas de Ingreso y el Plan de Seguridad Alimentaria en Argentina”. *Boletín Científico Sapiens Research*, Vol. 1 (2), pp. 54-59.

AZPIAZU, Daniel (1991) “Programas de ajuste en la Argentina de los años ochenta: ¿década perdida o decenio regresivo? Ponencia presentada en el seminario *Ajuste económico, sindicalismo y transición política en los años ochenta*, organizado por el Memorial de América Latina. San Pablo.

AZPIAZU, Daniel, BASUALDO, Eduardo y KHAVISSE, Mighel (1989) *El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80*. Buenos Aires: Editorial Legasa.

BOITO, María Eugenia, CERVIO, Ana Lucía y PAZ GARCÍA, Pamela (2010) “Territorio, política y prácticas del querer”, en Adrián Scribano y María Eugenia Boito (Comp.) *El purgatorio que no fue. Acciones profanas entre la esperanza y la soportabilidad*. Buenos Aires: CICCUS / CEA-UNC-CONICET. pp. 219-248.

BRITOS, Sergio; O'DONNELL, Alejandro; UGALDE, Vanina; CLACHEO, Rodrigo (2003) *Programas alimentarios en Argentina*. Buenos Aires: CESNI.

BRUERA, Matías (2005) *Meditaciones sobre el gusto: vino, alimentación y cultura*. Buenos Aires: Paidós.

CANTROT, Adolfo (1992) “La macroeconomía de la inestabilidad. Argentina en los ochenta”. *Boletín Informativo Techint*, N° 272, Buenos Aires.

CASTELLANI, Ana (2007) “Los ganadores de la década perdida’. La consolidación de las grandes empresas privadas privilegiadas por el accionar estatal. Argentina 1984-1988”, en Alfredo Pucciarelli (Coord.) *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?* Buenos Aires: Siglo XXI.

CERVIO, Ana Lucía (2012) *Los sentidos de ciudad desde organizaciones de base territorial: Córdoba 1983-1992*. Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (mimeo).

COROMINAS, Joan (1987) *Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana*. 3º Edición. Madrid: Editorial Gredos.

EYNARD, Martín (2010) “La negación del hambre como conjuro. Entrevista a Edgardo Lander”. *Onteaiken*. Boletín sobre Prácticas y Estudios de Acción Colectiva N°10, Año 5. Pp.98-104.

_____ (2013) *Cuerpos y alimentación en crisis: conflictos sociales en torno a la cuestión alimentaria en la ciudad de Córdoba, 2001-2007*. Tesis de Doctorado, Mención Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nacional de Quilmes (mimeo).

IÑIGO CARRERA, Nicolás, COTARELO, María Celia, GÓMEZ, Elizabeth y KINDGARD, Federico. (1993) “La revuelta argentina 1989-1990”, *PIMSA, Documento de Trabajo N°4*, Buenos Aires.

LOZANO, Claudio (2001). “Contexto económico y político en la protesta social de la Argentina contemporánea”. *OSAL* N° 5 - septiembre 2001. Pp. 5-10.

MACEIRA, Daniel y STECHINA, Mariana (2008) “Intervenciones de política nutricional en 25 años de democracia”, *Documento de Políticas Públicas*. Buenos Aires: CIPPEC.

MARTÍNEZ, Oscar (1991) “El escenario: febrero-julio de 1989. Terrorismo económico y desestabilización política”, en Oscar Martínez *El menemato. Radiografía de dos años de gobierno de Carlos Menem*. Buenos Aires: Letra Buena. Pp 15-46.

MELUCCI, Alberto (1989) *Nomads of the Present*. London: Hutchinson Radius.

_____ (1991) *Il gioco dell'io: il cambiamento di sé in una società globale*. Milano: Feltrinelli.

_____ (1996) *Challenging Codes. Collective Action in the Information Age*. New York: Cambridge University Press.

NEUFELD, María Rosa y CRAVINO, María Cristina (2001) “Los saqueos y las ollas populares de 1989 en el Gran Buenos Aires. Pasado y presente de una experiencia formativa”. *Revista de Antropología*, Vol. 44, N° 2. Pp- 147-172.

OJEDA, Silvia; PEREYRA, Liliana E. y GONTERO, Sonia (2005) “La pobreza en los hogares del Gran Córdoba: aplicación del modelo de regresión logística”. *Revista de Economía y Estadística*, vol. 43, N° 1. Pp. 99-121.

ORTIZ, Ricardo y SCHORR, Martin (2007a) “La economía política del gobierno de Alfonsín: creciente subordinación al poder económico durante la ‘década perdida’”, en Alfredo Pucciarelli (Coord.) *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?* Buenos Aires: Siglo XXI editores.

_____ (2007b) “Crisis del Estado y pujas interburguesas. La economía política de la hiperinflación”, en Alfredo Pucciarelli (Coord.) *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?* Buenos Aires: Siglo XXI editores.

OYHENART, Evelia Edith, DAHINTEN Silvia Lucrecia, ALBA, José, *et. al* (2008). “Estado nutricional infante juvenil en seis provincias de Argentina: variación regional”. *Revista Argentina de Antropología Biológica* 10(1): 1-62.

PENGUE, Walter (2004) “Producción agroexportadora e (in)seguridad alimentaria: el caso de la soja en Argentina”. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica (REVIBEC)*, vol 1. Pp. 46-55.

PIMSA (2013) *Argentina. Cronología del conflicto social. Diciembre 2013*. Buenos Aires: PIMSA.

RUCHT, Dieter, KOOPMANS, Ruud, NEIDHARDT, Friedhelm (Eds.) (1999). *Acts of Dissent. New developments in the study of protest*. Maryland: Rowman & Littlefield Publisher.

SCRIBANO, Adrian (2003) *Una voz de muchas voces. Acción colectiva y Organizaciones de Base. De las prácticas a los conceptos*. Córdoba: SERVIPROH, KZE/MISEREOR.

_____ (2005) “La fantasía colonial argentina”. *Rebelión*. Disponible en: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21683> /Fecha de consulta, 10/09/2014.

_____ (2009) “A modo de epílogo. ¿Por qué una mirada sociológica de los cuerpos y las emociones?”, en Carlos Figari y Adrian Scribano (Comps.), *Cuerpo(s), Subjetividad(es) y Conflicto(s). Hacia una sociología de los cuerpos y las emociones desde Latinoamérica*. Buenos Aires: CICCUS-CLACSO. Pp. 141-151.

SCRIBANO, Adrian, HUERGO, Juliana, EYNARD, Martín (2010) “El hambre como problema colonial: fantasías sociales y regulación de las sensaciones en la Argentina después del 2001”, en Adrian Scribano y María Eugenia Boito (Comp.) *El purgatorio que no fue. Acciones profanas entre la esperanza y la soportabilidad*. Buenos Aires: CICCUS-CEA-UNC-CONICET. Pp. 23-51.

THOMPSON, Edward Palmer (1979) “La economía ‘moral’ de la multitud en la Inglaterra del siglo XVII”, en *Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*. Barcelona: Editorial Crítica Grijalbo.

VIÑAS, Marcelo (Dir.) (2005). Película “Hambre de Soja”. 51 minutos. Buenos Aires: ICARO Producciones.

Otras fuentes consultadas:

INDEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) – onda octubre: 1983-1990.

_____ (1998): *El concepto de localidad: definición, estudios de caso y fundamentos teóricos-metodológicos*. Buenos Aires, INDEC.

_____ (2002) Encuesta Permanente de Hogares (EPH) – onda de octubre de 2002.

LA VOZ DEL INTERIOR, Diciembre 1983- Marzo 1990 (versión papel).

LA VOZ DEL INTERIOR, Enero 2001 – Diciembre 2005 (versión papel).

MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA NACIÓN (2005) *Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS)* Disponible en: <http://datos.dinami.gov.ar/produccion/nutricion/material/A1c.pdf> Fecha de consulta, 15/06/2009.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la Lengua Española*, online. Disponible en: <http://www.rae.es/> Fecha de consulta, 01/09/2014.